

# **FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL**

## **EJERCICIO 2003**

### **INTRODUCCIÓN**

El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional fue creado por la Ley N° 24.855, como la principal herramienta financiera del Programa de Desarrollo Regional y Generación de Empleo y funciona en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 408 del 27 de julio de 2003. Previo a esa fecha, el Fondo se encontraba en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, según lo establecido en el Decreto N° 1044 del 16 de agosto de 2001.

Su objetivo es asistir a las Provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras públicas de infraestructura económica y social, preferentemente intensivas en mano de obra, tendientes a:

- la integración territorial;
- la disminución de los desequilibrios socioeconómicos;
- el desarrollo regional y el intercambio comercial.

El financiamiento a las Jurisdicciones Provinciales se encuentra garantizado con los recursos de la coparticipación federal de impuestos.

Para la capitalización del Fondo, el Decreto 924/97 creó, exclusivamente para ese fin, el Fideicomiso de Asistencia del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Esa capitalización se origina en la venta de acciones del Banco Hipotecario S.A., como así también en la obtención de recursos financieros a través de créditos, operaciones de pase y otros mecanismos que el Comité Ejecutivo de ese Fideicomiso de Asistencia, cuya Presidencia ejerce el Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, considere apropiados.

### **1. OBJETIVOS**

Los principales objetivos del Fondo son los siguientes:

- a. Financiamiento de obras públicas de infraestructura al Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este financiamiento se encuadra a:
  - i. las solicitudes de crédito presentadas por las Jurisdicciones.
  - ii. los cupos disponibles de cada Jurisdicción sobre la base de lo dispuesto en la Ley N° 24.855 y los índices asignados conforme a los artículos 3° incisos b) y c) y 4° de la Ley N° 23.548, incluyendo la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
  - iii. la inclusión en los presupuestos de cada una de las Jurisdicciones, de las obras cuyo financiamiento se solicita y del correspondiente compromiso de pago de los servicios de la deuda.
  - iv. el otorgamiento a favor del Fondo de la garantía de coparticipación federal de impuestos, en el caso de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- b. Preservar el patrimonio fideicomitado y, en lo posible, incrementar su capacidad prestable.
- c. Contribuir, a través de las obras financiadas, a la generación de empleo y al desarrollo regional.

## **2. LOGROS**

### **2.1. Los créditos a las Jurisdicciones y la redeterminación de los saldos deudores**

En el ejercicio 2003, el total de los créditos otorgados por el Fondo ascendió a \$141.911.042,69. Los créditos otorgados a las Provincias ascendieron a \$135.799.133,10, que representan el 95,7% del total, frente a los \$6.111.909,59 suscriptos con el Estado Nacional, que significan el 4,3% restante. Si esta comparación se efectúa con relación a los montos desembolsados se tiene que, en el año 2003, del total de desembolsos de \$77.736.934,76, las Provincias absorbieron \$70.487.885,75 (90,7%), mientras el Estado Nacional demandó \$7.249.049,01 (9,3%).

Desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2003, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional otorgó créditos para obras de infraestructura por \$679.479.138,34. Los desembolsos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2003 ascienden a \$534.687.102,84.

De la comparación entre los \$679.479.138,34 suscriptos y los \$534.687.102,84 desembolsados, conforme lo expresado en el párrafo precedente, surge que al 31 de diciembre de 2003, para los créditos ya suscriptos, restan desembolsar \$144.792.035,50 (21%).

Desde su creación, los créditos otorgados por el Fondo a las Provincias ascendieron a \$395.871.631,50, que representan el 58,3% del total, frente a los \$283.607.506,84 suscriptos con el Estado Nacional, que significan el 41,7% restante. Si esta comparación se efectúa con relación a los montos desembolsados se tiene que el Estado Nacional absorbió \$273.542.868,21 (51,2% del total de \$534.687.102,84) y las Provincias \$261.144.234,63 (48,8%).

El resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, expresado en moneda homogénea, muestra una utilidad de \$468.860.407,04.

El Resultado Operativo a la misma fecha arroja una ganancia de \$38.519.534,01, sin considerar la aplicación del CER a los saldos deudores de los créditos otorgados con capital propio, con anterioridad al 3 de febrero de 2002, conforme se aprecia en el siguiente cuadro resumen, a valores históricos.

Intereses ganados	\$ 45.916.348,08
Resultado por tenencia de acciones	\$581.545.688,30
Subtotal	\$627.462.036,38
Menos	
Incremento de reserva especial (art 36°)	\$ 4.589.121,77
Intereses devengados por deuda BCRA	\$ 8.464.357,27
Desvalorización de acciones	\$107.489.902,50
Diferencia inventario bienes de uso	\$ 96,70
<b>RESULTADO FINANCIERO NETO</b>	<b>\$506.918.558,14</b>
Más	
Recúpero previsión para juicios	\$ 41.300,00

Menos	
Gastos de administración	\$ 2.603.266,65
Otros egresos e ingresos	\$ 245.628,95
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$504.110.962,54</b>
Más	
Intereses devengados deuda BCRA	\$ 8.464.357,27
Menos	
Resultado por tenencia y desv. de acciones	\$474.055.785,80
<b>RESULTADO OPERATIVO (GANANCIA)</b>	<b>\$ 38.519.534,01</b>

El resultado operativo positivo logrado por el Fondo en el año 2003 es un claro reflejo de una eficiente y activa administración. El Consejo de Administración entiende que para potenciar el éxito en la consecución de los objetivos prioritarios del Fondo, como son el Desarrollo Regional y la Generación de Empleo, es imprescindible el crecimiento patrimonial con el consecuente aumento de la capacidad prestable en favor de las Jurisdicciones beneficiarias.

La recuperación que en el año 2003 experimentó la economía, con un crecimiento del Producto Bruto Interno del 8,4% se tradujo en un mejoramiento sustancial de la actividad económica general y de las obras públicas en particular. En este año, se consolidaron los acuerdos entre los comitentes provinciales y los contratistas de obras públicas, mediante la redeterminación de los precios de los contratos, poniendo nuevamente en marcha los planes de obras públicas provinciales, prácticamente paralizados en el año 2002.

La metodología y resultado de la redeterminación de los saldos deudores adoptada por el Fondo en el año 2002 -en el marco de las previsiones de los artículos 1071 y 1198 del Código Civil y 17 de la Carta Magna y conforme a las facultades que le confiere el inciso k) del artículo 13 del Decreto N° 924/97- ha resultado sustancialmente favorable al interés de las jurisdicciones beneficiarias, si se efectúa la comparación con las redeterminaciones de precios verificadas en todo el país en los contratos de construcción de obras públicas de infraestructura. Cabe recordar que en el año 2002, el Estado Nacional y las Provincias dictaron leyes y decretos aprobando metodologías de redeterminación de precios para su aplicación a los contratos suscriptos con obras en curso de ejecución.

El Fondo Fiduciario Federal mantuvo un contacto permanente con todas las Jurisdicciones, con el propósito de contribuir a la viabilización del financiamiento de sus obras públicas de infraestructura. Esta estrecha relación también sirvió para la explicación de los fundamentos jurídicos para la redeterminación de los saldos deudores en los convenios de mutuos de asistencia financiera otorgados con capital propio, antes del 3 de febrero de 2002.

En el marco de la normativa legal que rige el funcionamiento del Fondo y el del instituto del Fideicomiso que administra el Consejo que lo rige, la aplicación del CER con carácter supletorio, en resguardo del patrimonio del Fondo y de los objetivos impuestos por la Ley N° 24.855, resulta ser el más justo y beneficioso para la Jurisdicción frente a otras alternativas, aclarando que dicha decisión fue ponderada, conforme a lo expresado anteriormente, en el marco de las previsiones de los artículos 1071 y 1198 del Código Civil y 17 de la Carta Magna y conforme a las facultades y obligaciones estatuidas en la ley y decretos reglamentarios a su funcionamiento.

El destino de los financiamientos acordados, hubiera permitido utilizar criterios similares a los aplicados, por las Jurisdicciones, en su redeterminación de precios para las obras financiadas. Frente a los disímiles criterios utilizados por las distintas jurisdicciones en materia de redeterminación de precios que arrojaron, en general, un elevado porcentaje de incremento, el Consejo de Administración utilizó el CER como un índice de referencia más equitativo y menos gravoso.

El pago del capital a valores históricos con una tasa no retributiva implica una peligrosa descapitalización del Fondo, que el Consejo de Administración tiene como obligación evitar, en defensa de los intereses de las Jurisdicciones beneficiarias y de la aplicación de normas legales generales y específicas que rigen su funcionamiento.

Dada la naturaleza del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el compromiso de las partes, resulta indispensable la preservación de su capacidad prestable. Para ello, el reembolso de los créditos deberá efectuarse en valores reales y no solamente nominales para brindar un trato equitativo a todas las beneficiarias, para que en igualdad de condiciones puedan acceder a créditos similares para obras de la misma naturaleza. El objetivo buscado es que, razonablemente, la recuperación de los montos redeterminados posibilite la realización de nuevas obras de igual categoría y magnitud con

los nuevos precios. Dicha premisa sería imposible de cumplir si la recuperación de los créditos se efectuara a valores meramente nominales, con una tasa de interés que sólo resulta razonable si su aplicación recae sobre montos que mantienen su valor real.

Resulta indudable que la devaluación de la moneda, que originó la modificación normativa en materia de redeterminación de precios, fue ajena a la previsión y voluntad de las partes, por lo que no podía encontrarse prevista en los convenios de mutuo suscriptos, ni en las normas aplicables al tiempo de su celebración.

Una de las decisiones de mayor trascendencia adoptada por el Fondo en el año 2002 y continuada en el 2003, fue la política de financiar las redeterminaciones de precios que las Jurisdicciones acordaban con sus contratistas en las obras bajo financiamiento del Organismo, a efectos de que se produjera la reiniciación de las obras hasta su conclusión, evitando de esa manera la existencia de inversiones improductivas que no sólo no se incorporarían al acervo productivo del país, sino que, además, se deteriorarían por el simple paso del tiempo.

## **2.2. El Programa de Financiamiento Ordenado 2003 y 2004**

En el artículo 10 del Decreto N° 2263/02, mediante el que se implementó el Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales del año 2002 se estableció que “La jurisdicción provincial participante del Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales no podrá contraer ningún tipo de nuevo endeudamiento durante su duración, incluyendo la emisión de Títulos, Letras o Bonos de circulación como cuasi moneda; a excepción de operaciones de crédito para reestructurar deuda en condiciones más favorables para ella, previa autorización del Ministerio de Economía; y del financiamiento proveniente de organismos multilaterales de crédito. El Convenio Bilateral respectivo deberá contener las previsiones necesarias a este respecto”.

Esta restricción dificultó, en los últimos meses de 2002, el otorgamiento de nuevos créditos a las Provincias. En el caso de créditos otorgados para el financiamiento de las redeterminaciones de precios acordadas entre las provincias y los contratistas en obras con financiamiento del FFFIR, la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, después de intensas gestiones realizadas por este Fondo, interpretó que no se trataba de nuevos endeudamientos, ya que esos mayores montos eran producto de un proceso de redeterminación de

precios necesario para la conclusión de las obras ya iniciadas, al amparo de disposiciones legales tanto del Estado Nacional como de las propias Provincias.

Con el propósito de evitar dificultades similares para el año 2003, el Fondo en un contacto permanente con la citada Dirección Nacional y con la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias de la Secretaría de Hacienda acordó, en el marco del Programa de Financiamiento Ordenado 2003, la ampliación de las excepciones a nuevos endeudamientos contempladas en el artículo 10 del Decreto N° 2263/02. Por ello, el Decreto N° 297/03, del 17 de febrero de 2003 (B.O. del 19 de febrero de 2003), que establece el Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales para el año 2003, en su artículo 9° expresa que: “La jurisdicción provincial participante del Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales no podrá contraer ningún tipo de nuevo endeudamiento durante su duración, incluyendo la emisión de Títulos, Letras o Bonos de circulación como cuasi moneda; a excepción de operaciones de crédito para reestructurar deuda en condiciones más favorables para ella, previa autorización del Ministerio de Economía; del financiamiento proveniente de organismos multilaterales de crédito; y el proveniente de programas nacionales de financiamiento con destino a obras públicas y fines sociales. El Convenio Bilateral respectivo deberá contener las previsiones necesarias a este respecto”.

El texto adicionado (subrayado) eliminó las restricciones que tenían las Provincias para asumir nuevos endeudamientos con el Fondo Fiduciario Federal en el marco del Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales 2003.

El Decreto 1274, de fecha 16 de diciembre de 2003, publicado en el Boletín Oficial del 18 de diciembre de 2003, define el Programa de Financiamiento Ordenado correspondiente al ejercicio 2004. En su artículo 3° establece que: “La participación en el Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales se acordará mediante la suscripción de un Convenio Bilateral con la Jurisdicción Provincial respectiva. Será de aplicación a las modalidades referidas en los incisos a) y b) del artículo precedente lo establecido en los Artículos 8°, 9°, 10 y 12 del Decreto N° 297 del 17 de febrero de 2003. El Ministerio de Economía y Producción queda facultado para establecer las condiciones que deberán reunir las Jurisdicciones para participar en el Programa, los contenidos mínimos de los Convenios Bilaterales mediante los cuales se acuerde dicha participación y/o las acciones que en caso de incumplimiento pudieran corresponder a las Jurisdicciones Provinciales en el marco de la

ejecución del Programa bajo las modalidades establecidas en los incisos c), d) y e) del Artículo 2° del presente decreto” (el subrayado es propio).

Del texto subrayado se concluye que en el PFO 2004, sigue vigente el artículo 9° del Decreto 297/03 antes transcripto. Por lo tanto, las Jurisdicciones Provinciales están autorizadas a continuar suscribiendo créditos con el Fondo Fiduciario Federal, siempre que estos financiamientos estén previstos en el respectivo Convenio Bilateral.

El PFO 2003 fue suscripto por las siguientes 15

Provincias:

- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- La Rioja
- Mendoza
- Misiones
- Río Negro
- San Juan
- Tucumán

Hasta el 31 de enero de 2004, el PFO 2004 fue suscripto por las siguientes 11 Jurisdicciones:

- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- Misiones
- Río Negro
- San Juan
- Tucumán

Con relación a 2003 se ha agregado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todavía no han suscripto el Convenio las Provincias de Chubut, Córdoba, Corrientes, La Rioja y Mendoza.

### **2.3. Pagos por parte del Estado Nacional**

El 2 de septiembre de 2002, el Ministerio de Economía dictó la Resolución N° 350/02 (Boletín Oficial del 5 de septiembre de 2002), en la que se establecieron excepciones al diferimiento del pago de los servicios de la deuda pública por los préstamos contratados por el Estado Nacional. El artículo 2°, inciso d) de la citada Resolución dispuso lo siguiente:

“Establézcanse como nuevas excepciones al diferimiento de pagos de los servicios de la deuda pública... a las siguientes obligaciones: ... d) Los servicios de los préstamos contratados por el Estado Nacional con organismos del Sector Público Nacional, no pertenecientes al sistema financiero, que hayan sido destinados al financiamiento de obras de infraestructura”.

Esta excepción, que posibilitó al Fondo Fiduciario Federal el cobro de los vencimientos de la deuda de la Nación fue prorrogada para el año 2003, conforme a lo establecido en el artículo 2°, inciso i) de la Resolución N° 158/03 del Ministerio de Economía, del 12 de marzo de 2003 (Boletín Oficial del 13 de marzo de 2003).

## **3. POLÍTICAS Y ACCIONES SUSTANTIVAS**

### **3.1. Situación de la deuda con el Banco Central de la República Argentina**

En el ejercicio 2003, los intereses devengados por la deuda del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional con el Banco Central de la República Argentina ascendieron a valores históricos a \$8.464.357,27. El total pagado y devengado en conceptos de intereses desde julio de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2003, también a valores históricos, asciende a \$101.898.854,05. Originalmente esta deuda pertenecía al ex Banco Hipotecario Nacional y fue transferida al Fondo por el artículo 26 de la Ley N° 24.855. El monto total de la deuda al 31 de diciembre de 2003 asciende a \$620.921.085,28.

La fuerte incidencia financiera de esta deuda sobre la capacidad prestable del Fondo se ha incrementado notablemente, en razón de:

- a. La disminución del valor del patrimonio del Banco Hipotecario S.A. con relación al previsto en el momento de la sanción de la Ley N° 24.855; y
- b. La demora, por parte del Estado Nacional, en la venta de las 100.350.000 acciones del Banco Hipotecario S.A., cuyo producido debe destinarse al patrimonio del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Actualmente, el precio de las acciones del Banco Hipotecario S.A. se ubica en \$7,00 por acción. Si las 100.350.000 acciones antes citadas se valúan a ese precio, el total de activos del FFFIR al 31 de diciembre de 2003, asciende a \$1.251 millones. La deuda de \$621 millones con el BCRA, el aporte de capital pendiente de integración de \$100 millones al Banco de la Nación Argentina para el financiamiento de viviendas establecido por el artículo 35 de la misma Ley N° 24.855 y otros conceptos por \$14 millones eleva el total de pasivos a \$735 millones, por lo que el patrimonio neto del Fondo Fiduciario Federal asciende a \$516 millones.

La estructura patrimonial del Fondo muestra una alta dependencia del valor de las acciones del Banco Hipotecario S.A. que todavía se encuentran en poder del Estado Nacional para su venta. Cada \$1 de variación en la acción influye, ya sea positiva o negativamente, en aproximadamente \$100 millones en el patrimonio neto del FFFIR.

La liquidez total del Fondo al cierre del ejercicio 2003 es de \$105 millones que, junto a los cobros de capital e intereses futuros, conforme al Flujo de Ingresos y Egresos del Organismo, permitirán atender los \$144.792.035,50 que aún restan desembolsar en los créditos suscriptos al 31 de diciembre de 2003.

La realidad económica y financiera actual revela que, ante la deuda con el BCRA, el Fondo se encuentra, prácticamente, ante la imposibilidad de obtener el éxito en la consecución de los fines legalmente encomendados, que fueron, casi con exclusividad, la razón de ser de la privatización del Banco Hipotecario Nacional.

Cuando en 1997 se decidió esa privatización, el patrimonio del ex Banco Hipotecario Nacional que pasaría a formar parte del

FFFIR se ubicaba, bajo el régimen de convertibilidad, en aproximadamente 2.500 millones de pesos. El Mensaje de elevación del Proyecto de Ley por parte del Poder Ejecutivo Nacional informaba que “Estimativamente el Fondo se constituirá inicialmente con recursos que oscilan entre los dos mil millones de pesos (\$2.000.000.000) y tres mil millones de pesos (\$3.000.000.000), lo que permitirá agilizar y adelantar la ejecución del Plan de Inversiones Públicas, equivalente, por ejemplo, a cuatriplicar la inversión real directa prevista en el presupuesto para 1997”.

En igual sentido, este valor patrimonial del Banco fue ratificado en las distintas intervenciones parlamentarias realizadas por diputados y senadores durante las sesiones del Congreso Nacional que precedieron a la sanción de la Ley N° 24.855.

Esta disminución del valor patrimonial del Banco Hipotecario S.A. ha originado una realidad totalmente distinta a la imaginada por la ley de creación del Fondo. El pago de los servicios de la deuda con el Banco Central de la República Argentina por \$614 millones (aproximadamente \$6 millones mensuales), conforme a lo establecido en el Decreto N° 1284/99, resulta incompatible con el cumplimiento del excluyente objetivo de creación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional: la financiación de obras de infraestructura económica y social a la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Paralelamente, es importante destacar que en el balance del BCRA la incidencia de esta deuda ha tenido un comportamiento totalmente opuesto al descripto para el FFFIR. Debido a la elevada cantidad de activos en moneda extranjera en poder del instituto emisor, los \$614 millones adeudados por el FFFIR tienen una importancia relativamente menor a la que poseían al momento de la sanción del Decreto N° 1284, en noviembre de 1999. O sea que podríamos afirmar que:

- i) para el FFFIR, la deuda transferida por el artículo 26 de la Ley N° 24.855 pasó de ser importante (25% del patrimonio neto) a ser asfixiante e incompatible (100% del patrimonio neto) con el cumplimiento de los fines establecidos en su creación; y
- ii) para el BCRA disminuyó, en términos relativos, la importancia de su acreencia.

Dada la importante función de desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del tejido social que generan los proyectos financiados por el

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, conforme a una decisión del Consejo de Administración y a las solicitudes realizadas por la mayoría de los Gobernadores provinciales, se ha elaborado un proyecto de decreto, cuyo trámite se encuentra actualmente en poder de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción.

En ese proyecto, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional reconoce y asume la deuda con el BCRA, proponiendo un diferimiento de esa carga financiera hasta la fecha de finalización del fideicomiso, mediante la designación del BCRA como principal beneficiario del saldo resultante, hasta el monto de su acreencia, pasando el saldo restante al Estado Nacional, en su condición de fideicomisario. Los intereses se seguirían abonando mensualmente. Esta disposición, tal como se propone, cumple los siguientes propósitos:

- a. Cumple con la voluntad del legislador;
- b. Garantiza la cancelación de la deuda con el BCRA;
- c. Respeta la naturaleza del fideicomiso creado con sus objetivos de Desarrollo Regional y Generación de Empleo; y
- d. Fortalece al FFFIR, manteniéndolo como un sólido organismo de financiamiento para la exitosa implementación de un Plan Nacional de Obras Públicas.

### **3.2. Redeterminación de saldos deudores en los créditos otorgados a las Jurisdicciones**

Conforme a lo expresado en el punto 2.1. de esta Reseña, así como el apoyo a las Jurisdicciones en el proceso de redeterminación de precios ocupó un lugar de importancia en el accionar del Fondo, también la correlativa redeterminación de saldos deudores a partir del 3 de febrero de 2002 mereció un minucioso análisis y tratamiento durante 2003.

Una de las formas de asegurar el cumplimiento de los fines de la Ley N° 24.855 es la preservación del patrimonio, no sólo en sus aspectos cuantitativos sino también cualitativos, entendiendo que la calidad del patrimonio se garantiza por el mantenimiento de su capacidad

adquisitiva. Si el crédito otorgado se destinó a la construcción de una escuela se pretende que el pago de los saldos deudores garantice que, con ellos, se podrá financiar la construcción de una escuela de similares características. Igual ejemplo podría establecerse para cualquier otra obra de infraestructura.

La aplicación de un coeficiente de redeterminación de precios ha generado un proceso de conciliación con los funcionarios de cada Jurisdicción, conforme a lo acordado en todos los convenios de mutuo de asistencia financiera.

Para los nuevos créditos, el Fondo ha acordado con las Jurisdicciones la redeterminación basada en la evolución del Índice del Costo de la Construcción elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esta mecánica se ha aplicado a los convenios de mutuos de asistencia financiera suscriptos a partir del 9 de octubre de 2002.

### **3.3. Capitalización del Fondo**

Se efectuaron diversas solicitudes al Fideicomiso de Asistencia para la capitalización del Fondo, fundamentalmente por la venta de las acciones del Banco Hipotecario S.A. y por la concreción de operaciones de pase comprometidas con el Banco de la Nación Argentina por \$70.000.000. La fuerte crisis del sistema financiero, que afectó tanto al Banco de la Nación Argentina como al Banco Hipotecario S.A., impidió la concreción de las solicitudes realizadas.

Sin embargo, el 2 de febrero de 2004 venció el plazo para el ejercicio de las opciones por las acciones del Banco Hipotecario S.A., que fueron vendidas en la misma fecha del año 1999, conjuntamente a la venta del 28% de las acciones de ese Banco.

Las 270.000 opciones por un total de 27.000.000 acciones fueron vendidas, en 1999, al precio de \$0,50 por cada acción, fijándose el precio de la acción en \$7,00. De acuerdo a la información disponible se han vendido 125.366.500 acciones lo que ha significado un ingreso bruto de \$125.366.500. La deducción de una comisión bancaria por \$1.296.662,52, llevaría el producido neto a \$124.069.837,48, que recién el próximo 20 de abril se encontraría a disposición del Banco de la Nación Argentina, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso de Asistencia del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

### **3.4. Relaciones con el Banco de la Nación Argentina**

Los aportes al Banco de la Nación Argentina se encuentran determinados en los artículos 35 y 36 de la Ley N° 24.855.

Los aportes correspondientes al artículo 35 se efectúan “para generar la cartera de créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas”. Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1284/99, los aportes representan el 5% de los intereses percibidos por el Fondo “por los créditos otorgados a las jurisdicciones pertinentes, y de los intereses percibidos por las inversiones de fondos temporariamente no asignados a los fines previstos en la ley”.

Los aportes correspondientes al artículo 36 se efectúan “para la atención de un fondo de garantías de créditos para viviendas únicas, permanentes y no suntuarias, destinadas a personas de ingresos bajos y medios bajos, pudiendo aplicarse también como subsidios a las tasas de interés de créditos para las viviendas populares destinadas a los sectores de bajos ingresos”. El aporte del 10%, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1284/99, se realiza sobre los mismos conceptos determinados en el párrafo anterior.

En el año 2003, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional devengó aportes de capital al Banco de la Nación Argentina por un total de \$6.836.904,78. De este monto, \$2.278.968,26 correspondieron al artículo 35 y \$4.557.936,52 al artículo 36, de la Ley N° 24.855.

El total pagado y devengado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional a favor del Banco de la Nación Argentina en concepto de aportes de capital, desde el inicio de sus actividades hasta el 31 de diciembre de 2003 asciende a:

Artículo 35. Ley N° 24.855	\$ 8.514.199,91
Artículo 36. Ley N° 24.855	\$17.028.399,81
<b>T o t a l</b>	<b>\$25.542.599,72</b>

### **3.5. Equidad en la estructura tarifaria de los gastos de evaluación, auditoría y administración de instrumentos financieros**

El Fondo Fiduciario Federal continuó aplicando durante 2003, la estructura tarifaria unificada en el año 2002 para el cobro de los gastos de evaluación, auditoría y administración de instrumentos financieros, tanto para las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, como para el Estado Nacional, por el otro. Anteriormente, estos gastos tenían un tratamiento diferencial que no resultaba equitativo, ya que en su calidad de beneficiarios todas las Jurisdicciones merecen un tratamiento similar.

Este tratamiento igualitario y equitativo es una pauta que guía todas las decisiones del Fondo, ya sea en lo que hace las condiciones financieras (tasas de interés, plazos), como en todos los restantes aspectos de la operatoria. Anteriormente, existía una asimetría en los gastos por los conceptos enumerados, con un nivel de comisiones que resultaba inferior para la Nación con relación a las Provincias.

## **4. MEJORAS ORGANIZACIONALES**

- a. En virtud al Convenio Marco de Cooperación celebrado con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en el año 2002, el 14 de febrero de 2003 se suscribió el contrato para la segunda etapa de la Reingeniería Informática lo que derivó en la obtención de los productos finales que a continuación se detallan:
  - i. Utilizar las bondades del sitio de Internet para el intercambio con las provincias y el Control de Gestión.
  - ii. Automatización del funcionamiento de la estructura organizativa.
  - iii. Actualización y sistematización de los procesos que incluyen las tareas de las áreas del Organismo,
  - iv. Migración de los datos de los sistemas actuales.

- v. Integración y seguimiento de los procesos de control entre áreas del Organismo a través de la herramienta workflow.
  - vi. Desarrollo de informes de gestión para los distintos niveles.
  - vii. Determinación de las pautas de accesibilidad a los distintos niveles de información.
  - viii. Puesta en marcha del nuevo funcionamiento de los recursos del Fondo, y
  - ix. Desarrollo del Plan de Capacitación en la operación del sistema de los agentes involucrados.
- b. Dentro del Convenio Marco de Cooperación celebrado con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en el año 2002, el 2 de junio de 2003 se suscribió el contrato para la tercera etapa de la Reingeniería Informática lo que derivó en la obtención de los productos finales que a continuación se detallan:
- i. Acceso y operación vía página Web del FFFIR de las actividades, procedimientos e información existente y válida de acuerdo a la identificación del usuario habilitado.
  - ii. Esquema definitivo e integral normalizado de la base de datos Oracle con los datos ingresados por las Jurisdicciones y los generados por los sistemas específicos del Organismo.
  - iii. Estructura Organizativa y Funcional acorde a los resultados de la reingeniería encarada.
  - iv. Seguimiento de los niveles superiores de las tareas del personal a su cargo a través de herramientas informáticas.
  - v. Aumento en la automatización de los procesos de control por oposición entre áreas del Organismo.

- vi. Auditoría operativa de los procesos inválidos detectados a partir del ítem anterior, y
  - vii. Herramientas de generación de informes de gestión
- c. En el ámbito del Convenio Marco de Cooperación celebrado con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en el año 2002, el 19 de febrero de 2003 se suscribió el contrato para la “Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)”, lo que derivó en la obtención de los productos finales que a continuación se detallan:
  - i. Asegurar, a través de la aplicación de esta metodología, que los proyectos así evaluados cumplan inicialmente con las Normas de Impacto Ambiental; que garanticen las definiciones del Decreto 924/97, Art. 2.
  - ii. Diseño de una EIA única que facilite unificar los criterios, procedimientos e informes a ser utilizados en cada uno de los proyectos y que permitan ser incluidos dentro de los Pliegos de Licitación de las obras.
  - iii. Definir los requerimientos de obras en ejecución sobre la base de las EIA aprobadas y las etapas y metodología del procedimiento de Control Ambiental por el FFFIR, y
  - iv. Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental que garantice el mantenimiento permanente de las obras durante la ejecución del proyecto y con posterioridad a su terminación.
- d. También dentro del ámbito del Convenio Marco de Cooperación celebrado con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en el año 2002, el 7 de agosto de 2003 se suscribió el contrato para la “Realización de Auditoría Contable y Técnica de Obras”. La auditoría de 32 obras distribuidas en todo el territorio nacional consistió en:

- i. Constatación del avance real de la obra contratada y que el mismo sea coincidente con la marcha de la certificación respectiva, verificando que el avance físico y financiero de las obras guarden razonable coherencia.
  - ii. Verificación que el parque de maquinarias disponible en la obra se corresponda con lo acordado en el respectivo contrato y garantice el adecuado cumplimiento del cronograma de avance de obras acordado.
  - iii. En los casos que el financiamiento haya contemplado acopio de materiales, deberá verificarse la existencia de los mismos, y
  - iv. Constatación de la existencia de la mención “Obra Financiada por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional” en los carteles de las obras, conjuntamente con los responsables de las mismas.
- e. Ampliación del contrato con GLD Consultores SRL, para que el Sistema Completo de Gestión de Administración de Cartera de Créditos contemple la redeterminación de los saldos deudores, mediante la aplicación de la variación mensual del Nivel General del Índice del Costo de la Construcción elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

## **5. INICIATIVAS ESPECÍFICAS NO INCLUIDAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES**

- a. Participación del Fondo en la 51º Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción realizada el 18 de noviembre de 2003 en el teatro General San Martín. El evento contó con la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional, de los Gobiernos provinciales y de lo más representativo del empresariado de la construcción y de empresas proveedoras, lo que resultó de gran importancia desde el punto de vista institucional, ya que permitió la difusión de los objetivos y la actividad del Fondo Fiduciario Federal.

- b. El personal del Fondo participó en numerosos eventos destinados a su capacitación y especialización. En el curso del año 2003 se pueden destacar los siguientes:
- i. Curso “Elaboración de estados contables en moneda constante. Cálculo, valuación y exposición”, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  - ii. “I Curso Básico sobre Presupuesto”, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.
  - iii. “I Curso Básico sobre Compras y contrataciones”, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.
  - iv. Seminarios “El derecho administrativo de la emergencia, V”, “El derecho administrativo de la emergencia, II” “El derecho administrativo de la emergencia, III”, organizado por la Fundación de Derecho Administrativo.
  - v. Curso “Microsoft Access 2000 Nivel III Programming”, organizado por Exo S.A.
  - vi. Curso “Liquidación del impuesto a las ganancias, 4° categoría, Régimen de retención” organizado por Arizmendi S.A.
  - vii. Curso “Regímenes de retención de ganancias. Prácticos y jurisprudencia”, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  - viii. “Curso de capacitación y perfeccionamiento del módulo de sueldos del Sistema Tango”, organizado por TSYS S.A.
- c. Por sexto año consecutivo se contrató la auditoría externa de los estados contables, a través de una invitación a un concurso de precios. Las auditorías anteriores habían sido

efectuadas por el mismo sistema y fueron realizadas por Coopers & Lybrand para los estados contables de los años 1998 y 1999, Pricewaterhouse&Coopers para los estados contables de 2000 y 2001, y BDO Becher, Lichtenstein & Asociados para los estados contables de 2002. Para los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2003 se contrató nuevamente a la empresa BDO Becher, Lichtenstein & Asociados.